



JUAN CARLOS PORTANTIERO

**CLASES DOMINANTES Y CRISIS
POLITICA EN LA ARGENTINA
ACTUAL**

2003 - Reservados todos los derechos

Permitido el uso sin fines comerciales

JUAN CARLOS PORTANTIERO

CLASES DOMINANTES Y CRISIS POLITICA EN LA ARGENTINA ACTUAL

Estas notas forman parte de un intento de fundar, a partir del materialismo histórico, la relación específica que se plantea, en la argentina actual, entre el desarrollo de las contradicciones en el nivel económico-social y en el nivel político-social. * El supuesto que opera detrás del análisis es que entre ambos niveles se manifiesta una diferencia de “tiempos” y que, por lo tanto, el “descubrimiento” de la contradicción principal en el plano económico-social no implica encontrar a la misma simultáneamente “desplegada” en el plano político-social. Esa diferencia de tiempo de la contradicción sólo es eliminada a través de un proceso histórico y esa es precisamente, la tarea a resolver por toda estrategia revolucionaria correcta: la fusión de los tiempos disímiles de la contradicción sólo se consuma plenamente en el período de la revolución social.

El objeto del trabajo es, por lo tanto, el análisis de la coyuntura; el estudio de las reacciones de fuerza política en la sociedad argentina. Su finalidad, inscribirse en la discusión y, por medio de ella, en la práctica de constitución de un bloque social de poder alternativo al dominante, que se consumará a través de un proceso en cuyo punto de llegada las contradicciones tal cual se dan en el plano económico-social coincidirán con las que aparecen en la escena política.

En el trabajo distinguiremos dos niveles conceptuales. A uno lo llamaremos el de las “clases sociales”; al otro, el de las “fuerzas sociales”. El segundo no puede fundarse sino sobre el primero, pero su constitución supone un proceso histórico relativamente autonomizado.

El nivel que llamamos de las clases sociales marca “la relación de fuerzas sociales estrechamente ligadas a la estructura objetiva, independiente de la voluntad de los

hombres”. El de las fuerzas sociales marcaría “la fase más estrictamente política, que señala el neto pasaje de la estructura a la esfera de las superestructuras complejas (...) la fase en la cual las ideologías ya existentes se transforman en partido”. (1)

Con los conceptos de clase social y fuerza social así definidos se conectan, respectivamente, el de “alianza de clases” y el de “bloque de fuerzas”, asociados entre sí de la misma manera que lo están los anteriores. Una alianza de clases supone una articulación de clases y fracciones de clase que el observador establece como “necesaria”, al margen de la voluntad de los actores, a través de la adjudicación de “intereses objetivos” en términos de la contradicción en el nivel de la estructura de una formación económico-social. Las clases y fracciones así agrupadas conforman, por lo tanto, un específico “campo de interés”.

El bloque de fuerzas supone, en cambio, un complejo proceso de constitución en el que interviene la conciencia y la voluntad de los actores sociales. Su escenario es la política y su objetivo el poder; allí, las clases sociales (y aun otros grupos que no podrían ser definidos rigurosamente como tales) actúan a través de fuerzas sociales, es decir, como producto de un intercambio entre objetividad y experiencia, entre estructura y superestructura, entre posición objetiva y organización voluntaria.

Tanto la alianza de clases como el bloque de fuerzas no son unidades indiferenciadas; en su interior operan también las contradicciones —aunque de grado secundario— y la relación entre los componentes no es simétrica: uno de ellos “domina” sobre el resto. Para marcar esa dominación en el nivel de los proyectos de las fuerzas sociales, del bloque de fuerzas, cuyo campo de constitución es, como queda dicho, la política, reservamos el concepto de “hegemonía”. Para el nivel de los intereses, de las clases, de la alianza de clases, cuyo campo de constitución es la economía, reservamos el concepto de “predominio”.

En este sentido, la clase o fracción de clase que es predominante en su campo de intereses no es automáticamente hegemónica en el bloque de fuerzas. Esto es válido para cualesquiera de los dos polos de la contradicción principal. Así, la clase o fracción de clase predominante en el interior de las clases propietarias puede no ser hegemónica de las otras clases y fracciones pertenecientes a su mismo campo de intereses. En el otro extremo, clase o fracción de clase sobre cuya explotación se funda principalmente la dominación puede no ser hegemónica de las otras clases y fracciones pertenecientes a su mismo campo de intereses. En el otro

extremo, la clase o fracción de clase sobre cuya explotación se funda principalmente la dominación puede no ser hegemónica de las otras clases y fracciones pertenecientes a su mismo campo de intereses.

Toda política orgánica de poder tiende a hacer compatible, en cada uno de los extremos, el predominio con la hegemonía. La asincronía, en uno como en otro, puede perdurar bastante tiempo: esa situación constituye una de las claves principales de la coyuntura política argentina.

PREDOMINIO ECONÓMICO Y HEGEMONÍA POLÍTICA

El punto de partida de este análisis, al que se toma como dato, es el proceso de monopolización operado en la estructura productiva argentina.

En efecto, a partir de la década del 60 culmina un proceso de monopolización de los sectores fundamentales de la economía y de creciente control de las actividades productivas y financieras por parte del capital extranjero.

Dicho proceso instala como fracción de clase predominante en el interior de los grupos propietarios a la gran burguesía industrial, financiera y comercial monopolista, extranjera o asociada al capital extranjero, desplazando de su predominio tradicional a la gran burguesía agraria. Nuestra intención no es explicitar los mecanismos que operan en el interior de la estructura económica, a los que damos por supuestos, sino examinar la forma de inflexión de esos datos en los otros niveles de las relaciones sociales, particularmente el político.

El predominio de la fracción monopolista en el terreno de la economía supone la apertura de una nueva etapa que fija las leyes generales de movimiento y constitución de las fuerzas sociales, al redefinir los campos de interés común de las clases. Lo que interesa ver, precisamente, es la forma de pasaje entre predominio económico y hegemonía política, de modo tal que lo económico funcione efectivamente en el análisis como “determinación en última instancia”, es decir, como serie de parámetros que fijan los límites de variación posible de las relaciones de fuerza en los planos político e ideológico.

Una sociedad no aparece, obviamente, como una yuxtaposición de “niveles estructurales”, sino como un entretendido de relaciones sociales, de comportamientos de actores sociales. Parecería redundante recordarlo, pero ante la ola de nominalismo estructuralista que tiende —al menos en su uso vulgar— a fetichizar los instrumentos analíticos como si fueran estructuras concretas, la reiteración no es inútil. La sociedad, recuerda, Marx en su famosa carta de Annenov de 1846, es “el producto de la actividad recíproca de los hombres”. En la medida en que esa reciprocidad no está regulada por el azar sino que detrás de la misma opera una legalidad que le otorga sentido, las distinciones analíticas que propone el materialismo histórico tienen la finalidad de hacer inteligible lo que en la representación aparece como un caos. Es a partir de esa necesidad de explicación que tiene sentido postular que “la sociedad no consiste en individuos sino que expresa la suma de las relaciones y condiciones en las que los individuos se encuentran recíprocamente situados” (2) y que vale la diferenciación entre los “niveles” de la realidad social (estructuras económica, política, ideológica), entendiéndolos como categorías analíticas, como dimensiones que ayudan a explicar la interrelación de las estructuras concretas. La reificación de las categorías conduce, en cambio, a una revitalización del reformismo — alimentado por una lectura autosuficiente del prefacio de Marx a la Crítica de la Economía Política — según el cual la historia sería “producto” de las estructuras, mientras la acción humana, la voluntad, la experiencia, quedan reducidas a un rol subordinado.

Siguiendo estos supuestos, la pregunta que, según Gramsci, surge como central en el marxismo, esto es, cómo de la estructura nace el movimiento histórico, queda sin respuesta. Paradojalmente, la “rigurosidad” en el tratamiento de las leyes que rigen la estructura puede transformarse así en virtual indeterminación para el campo de la política, sobre el que muy poco podría predecirse: por un camino sinuoso, el determinismo se convierte en espontaneísmo.

El nivel de análisis elegido para este trabajo es el de las relaciones de fuerza política, es decir, un espacio en el que operan fuerzas sociales, en el que los conflictos de clase aparecen transmutados como conflictos entre fuerzas, en el que las alianzas de clase buscan constituirse como bloque de poder a través de un proceso relativamente autónomo de la determinación estructural, de un proceso complicado que califica la discontinuidad existente entre estructura y superestructura.

Pero esa distancia, que funda la autonomía de la política, no significa que ésta gire en el vacío. El análisis en el nivel de la coyuntura supone una caracterización científica de la etapa económica y de sus consecuencias en el nivel de las clases sociales. El examen de lo político no puede realizarse a espaldas de lo económico: se asocia con él, en la medida en que aparece como condición para medir la desviación o la correspondencia entre los “tiempos” de la contradicción.

Una nueva etapa económica supone la definición primaria de nuevos actores sociales, a la vez que determina reajustes en los campos de interés. En un primer momento los nuevos protagonistas aparecen definidos objetivamente en el nivel de las clases; su representación social y política, sin embargo, se demorará. Durante todo un período el espacio de la política estará primordialmente ocupado por núcleos residuales, fuerzas sociales y grupos políticos demorados cuyas respuestas apuntan a preguntas planteadas durante la etapa anterior y que sólo en ella podían ser satisfechas. Estos rezagos que desvían o amortiguan las nuevas líneas de conflicto social planteadas por los cambios en la economía, pueden ser, en el corto plazo, factor principal de las decisiones políticas: desautorizados históricamente en el nivel estructural, “vaciados” ya de contenido si se los observa desde el futuro, suelen manifestarse como protagonistas principales en el plano político presente.

Una situación en que los nuevos encuadramientos de clase no se encarnan en fuerzas sociales que se correspondan con ellas no es excepcional: una etapa se cierra primero en el plano económico-social que en el plano político.

Nuestra hipótesis central es que esa situación se da hoy en la sociedad argentina con un arrastre de casi dos décadas: desde mediados de los años cincuenta, cuando entra en crisis el ciclo de industrialización sustitutiva, al ritmo del cual se desarrollaron, durante veinte años, las fuerzas productivas en el país.

Nuestro punto de partida para el análisis de una sociedad y de una coyuntura es la lucha de clases. Desde la perspectiva del materialismo histórico sólo ese examen nos permite determinar la contradicción principal, las contradicciones secundarias o subordinadas y las relaciones entre ambas. Descubrir la contradicción principal supone, según Mao, “descartar la arbitrariedad subjetiva”; su dilucidación se mueve por lo tanto en el nivel objetivo, el de los campos de interés, el de las clases, sus enfrentamientos y sus alianzas. Gramsci calificará este momento como el primer grado en el análisis de la relación de fuerzas, “que puede ser medida con los sistemas de las ciencias exactas o físicas”. (3)

Este nivel es fundante pero no agota el análisis de la realidad, no nos instala aún en el espacio político de la lucha de clases. “El desarrollo de los aspectos contradictorios en cualquier contradicción es siempre desigual”, señala Mao, y esa desigualdad, que marca los aspectos principal y secundario de la contradicción, tiene que ver con la voluntad, penetra en el nivel de las superestructuras. “En un proceso determinado o en una etapa determinada del desarrollo de una contradicción, el aspecto principal es A y el aspecto secundario es B, pero en otra etapa o en otro proceso, los papeles se invierten; éste cambio está determinado por la extensión del crecimiento o disminución de la fuerza con que cada uno de los dos aspectos lucha contra el otro en el desarrollo de las cosas” (4). Sólo el “esfuerzo de los

revolucionarios”, anota Mao, hará que las circunstancias desfavorables se truequen en favorables.

Estamos ya en el segundo grado gramsciano del análisis de la relación de fuerzas, el político que valora, de acuerdo con Gramsci, “el grado de homogeneidad, autoconciencia y organización alcanzado por los diversos grupos sociales”. Es decir, entramos en el nivel de las fuerzas sociales, en el de la correspondencia, analizada como proceso, entre estructura y superestructura.

LA CONTRADICCION PRINCIPAL EN LA ARGENTINA

Es a partir del análisis de esa “realidad rebelde” que, en términos gramscianos conforma el primer grado de la relación de fuerzas, que puede determinarse objetivamente el “tipo” de sociedad (abarcando en la definición simultáneamente la “contradicción principal” y las “contradicciones secundarias” que operan en el nivel estructural), así como el “tipo de revolución” que tal sociedad puede plantearse con realismo.

Este análisis incluye, desde el momento en que el capitalismo es un sistema mundial, no sólo las relaciones

sociales objetivas que predominan en el interior de cada sociedad nacional, sino los nexos que ligan a ésta con el sistema internacional capitalista, entendiendo a éste no como “la yuxtaposición de sistemas capitalistas nacionales”, sino como una red integrada de relaciones cuyo eje es la acumulación a escala mundial. (5)

La Argentina formaría parte, así, del conjunto de sociedades capitalistas dependientes. Decimos que es capitalista porque tanto en la ciudad como en el campo, predominan abiertamente las relaciones capitalistas de producción, distribución, consumo e intercambio. Partiendo de este análisis de la lucha de clases en el plano social, la contradicción principal aparecería como contradicción entre fuerza de trabajo y capital, entre proletariado y burguesía, de acuerdo con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas y el tipo de relaciones de propiedad dominantes.

Pero añadimos que la sociedad argentina es dependiente, esto es, forma parte de los países llamados del “Tercer Mundo”, insertados en una división internacional del trabajo establecida por las naciones imperialistas. La dependencia que oprime a la Argentina sería así una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia” (6). Para algunos, el significado de la dependencia sobre la sociedad argentina como totalidad sería de tal magnitud, que la contradicción principal se redefiniría como antagonismo entre Nación e Imperialismo.

En buena medida, tácita o explícitamente, la discusión de las estrategias políticas revolucionarias gira alrededor de esas posiciones extremas que, al ubicar ambas el eje de la lucha de clases en el marco nacional y no en el del capitalismo como sistema mundial, disocian alternativamente a los dos componentes de la definición, enfatizando sea el capitalismo como sistema nacional de estratificación o a la dependencia como sistema mundial de estratificación.

Lo correcto parece ser encontrar el punto en que ambas variables se articulan, tal como lo plantea la moderna teoría marxista de la dependencia: “la controversia —señala Amin— podrá superarse únicamente si se considera que la lucha de clases no se desenvuelve dentro de los cuadros nacionales, sino en el cuadro del sistema mundial” (7).

Empíricamente, para el caso argentino, que es un grado dentro de la escala de capitalismo dependiente, ese plano de articulación sólo puede encontrarse a través del examen de las características con que opera actualmente el capital imperialista, superada la etapa de dependencia con relación a Gran Bretaña y de crecimiento “hacia afuera” de las fuerzas productivas. Desde ese momento, ubicable muchas décadas atrás, el imperialismo dejó de ser un factor primordialmente “externo” para transformarse básicamente en “interno”, en pivote estructural de la economía. La Argentina siempre ha sido una sociedad con escaso poder de decisión, pero esa subordinación, actualmente, se ha “interiorizado” mucho más, fusionando al imperialismo con la estructura productiva local más desarrollada: no estamos enfrentando solamente a una “bomba de succión” exterior al sistema sino a un componente interno, expresado en el control del capital extranjero sobre los centros más dinámicos de la actividad industrial, constituido así en factor decisivo para la expansión de las relaciones capitalistas de producción.

A partir de esta característica, la contradicción principal en la Argentina se establece por el antagonismo entre dos campos de interés, dos alianzas de clase, lideradas respectivamente por el capital imperialista enraizado en la estructura productiva y por la fracción del proletariado directamente explotada por él.

Extendiendo a la sociedad global la definición que Serge Mallet utiliza específicamente para el mundo obrero, esta contradicción entre burguesía monopolista y proletariado industrial, en el espacio de la fábrica dominada por el capital imperialista, constituiría — claramente desde los años 60— el “nudo estructural” de la sociedad, el terreno de constitución de las principales fuerzas en pugna.

Ambos sectores predominarían, a su vez, en el interior de sus campos de interés sobre otras clases o fracciones, por lo que un segundo paso en el análisis debe llevar a determinar empíricamente la composición específica de cada una de estas alianzas, así como las contradicciones secundarias que operan en el interior de cada una de ellas.

Pero todo esto, por más refinado que resulte el análisis (y está claro que cuanto más lo sea mejores podrán resultar a posteriori las conclusiones políticas) nos mantendrá todavía en el examen del nivel económico-social de la contradicción, sin relacionarlo con la diferencia de “tiempos” que lo alejan de los otros niveles. Lo que nos marcaría es “el grado de realismo y posibilidad de realización” (Gramsci) de las luchas políticas e ideológicas; es decir, la “determinación en última instancia” del movimiento de lo económico sobre el movimiento de las otras instancias.

Pasar de ese nivel al de las relaciones de fuerza políticas supone una discontinuidad, una ruptura: en el plano del examen de coyuntura decir que la contradicción principal en la Argentina actual se da entre proletariado y capital imperialista es sólo fijar un punto de partida no un punto de llegada, en tanto éste sólo puede hallarse en el espacio de la lucha concreta por el poder político. Pero, a la vez, la eficacia de esa lucha desde el punto de vista revolucionario no puede fundarse sin tomar como básico como determinante, al nivel económico-social de la contradicción. No hay, en una palabra, posibilidad de constitución de un bloque social de alternativa destinado a reemplazar revolucionariamente al estado actual, sin un “descubrimiento” científico de las alianzas de clases que expresan campos de intereses antagónicos y del papel predominante que en una u otra de ellas tiene objetivamente una fracción de esas clases. Y esto, porque la base de toda estrategia eficaz es el logro de la correspondencia entre el nivel económico-social de la contradicción y el nivel político-social.

Esta relación entre niveles no siempre aparece articulada en la discusión política e ideológica de los grupos que en la Argentina se postulan como revolucionarios. La trabazón entre las dos instancias de la contradicción se disocia, sea en un socialismo que puede acertar en el pronóstico a largo plazo pero que se muestra ineficaz para operar en la coyuntura, o en un politicismo que puede acertar en la descripción del momento presente pero que por desconocer toda ley que opere más allá de la realidad visible, resulta incapaz de proyectar una estrategia ofensiva a largo plazo.

El camino propuesto por el marxismo, cuando opera como teoría de la historia y como principio de dirección política, es otro: relacionar los dos niveles, establecer desde el punto de vista de la clase que lidera el campo objetivo de la revolución cuál es el grado de correspondencia que existe entre sus intereses y su actualización en el espacio de la política de poder. Y estudiar también el mismo proceso en el otro campo, relacionar predominio y hegemonía en el interior del otro bloque. Por ello, todo análisis de coyuntura (y una línea política no es otra cosa que eso) supone integrar el examen del sistema de contradicciones —de la lucha de clases— tal cual se da en la estructura (para definir así el “tipo” de revolución y las condiciones de constitución de las fuerzas sociales) con la especificación de los aspectos principal y subordinado de ese sistema de contradicciones, esto es, con la discriminación acerca de la relación de fuerzas políticas tal cual ella se da, que es lo que marca en definitiva la característica de la etapa. Es en ese sentido que el análisis de coyuntura fusiona sociología y política.

EL EMPATE HEGEMONICO

Hemos considerado la contradicción principal en la Argentina de hoy como aquella que enfrenta al proletariado con el capital monopolista. Pero, especificando una definición política de la etapa actual, agregamos ahora que las líneas generales del proceso desde 1955 se encuadran dentro de lo que llamaríamos fase de no correspondencia entre nueva dominación económica y nueva hegemonía política.

Con esta definición nos ubicamos en el plano en que ya se articulan los niveles económico y político: el de la determinación del aspecto principal de la contradicción. El supuesto es que dicho aspecto está desempeñado en la coyuntura argentina por el conjunto de las clases dominantes y por las fuerzas sociales que las representan, las cuales, aunque con

dificultades para resolver dentro de su bloque el problema de la hegemonía, se hallan en una etapa de ofensiva en la que por momentos aparecen —como resultado de las presiones de las clases dominadas y de las contradicciones que operan en el interior del bloque dominante— situaciones de equilibrio de fuerzas, que, como en el presente pueden dar lugar a un repliegue político del capital monopolista.

Todo este período en el que la iniciativa política puede encuadrarse dentro de los intentos de la fracción monopolista del capitalismo por transformar su predominio económico en hegemonía, se resume en los siguientes rasgos característicos:

- 1- Situación de ofensiva general de las clases dominantes.

- 2- Fragmentaciones en el interior de ese bloque como resultado de la aparición de contradicciones de tipo secundario entre las clases y fracciones que lo integran;

- 3- Proyección de esas fragmentaciones en el plano político (lucha por la hegemonía) a través de la aparición de proyectos alternativos y de división y reparto de control sobre distintos aparatos sociales (Fuerzas Armadas, partidos políticos, burocracia sindical, etc.).

- 4- Situación de “empate hegemónico” —que en los momentos críticos asume formas de “vacancia hegemónica”— en el interior del bloque, aunque a la larga el proceso opere en favor de la fracción económicamente dominante —el capital monopolista— a un costo mayor que el esperado.

Esta descripción de los rasgos más característicos de la etapa está concebida a partir de las clases dominantes, porque su ofensiva marca el aspecto principal de la contradicción. Parecería, por lo tanto, que las clases dominadas no tienen ninguna presencia política y no ejercen, correlativamente, ninguna influencia en los desplazamientos que se operan en el poder, en la incapacidad que manifiesta el sector predominante para transformarse en hegemónico.

La situación, por supuesto, no es ésta, ni teórica ni empíricamente. Todo análisis de coyuntura es análisis de una relación entre fuerzas dominantes y dominadas, en que el

movimiento de unas supone el desplazamiento de otras. Por ello, si una etapa puede ser leída analíticamente desde dos ópticas, en la perspectiva de las clases dominantes y en la de las clases dominadas siempre, en la realidad, una aparece como reverso de la otra, como pares que se condicionan mutuamente y que sólo analíticamente pueden ser aislados.

Cuando caracterizamos, por ejemplo, a la situación argentina como una situación de asimetría entre predominio económico y hegemonía política, estamos haciendo referencia, en términos de las clases dominantes, a la existencia de una situación de “crisis orgánica”. Pero una situación de crisis orgánica es siempre, potencialmente, para las clases dominadas, una “situación revolucionaria”. En este sentido, los rasgos de una y otra se complementan.

Para Gramsci, una crisis orgánica es aquella en que “los partidos tradicionales con la forma de organización que presentan, con aquellos hombres que los constituyen, representan y dirigen ya no son reconocidos como expresión propia de su clase o de una fracción de ellas” (8). Esto origina una “crisis de autoridad” que tiende a reforzar “la posición relativa del poder de la burocracia (civil y militar), de las altas finanzas, de la Iglesia y en general de todos los organismos relativamente independientes de las fluctuaciones de la opinión pública”.

El punto de partida de una “situación revolucionaria” según Lenin se define por rasgos parecidos: “crisis en las alturas” y crecimiento de la movilización (9). Pero lo que Lenin enfatiza en ese texto son las condiciones para que esa crisis de hegemonía, que desde la perspectiva de las clases dominadas conforma una situación revolucionaria, se transforme en crisis revolucionaria.

Nuestro esfuerzo se orientará hacia el enfoque de la situación en términos de crisis orgánica, es decir, en un nivel en el que la presencia de las clases dominadas opera sólo en un segundo plano.

En estos términos, una caracterización particularizada de la coyuntura actual se resumiría en estos rasgos:

- 1- Mantenimiento crónico de una situación de crisis orgánica que no se resuelve como nueva hegemonía por parte de la fracción capitalista predominante ni como crisis revolucionaria para las clases dominadas.

2- Predominio de soluciones de compromiso en las que “fuerzas intermedias”, que no representan consecuentemente y a largo plazo los intereses de ninguna de las clases polares del “nudo estructural” ocupan el escenario de la política como alternativas principales, aun cuando su constitución sea residual y su contenido heterogéneo inexpresivo de las nuevas contradicciones generadas por el desarrollo del capitalismo monopolista dependiente en la Argentina.

Con estos alcances tendría sentido una definición de la situación de hoy en el plano político-social como de “empate”: “Cada uno de los grupos tiene suficiente energía como para vetar los proyectos elaborados por los otros, pero ninguno logra reunir las fuerzas necesarias para dirigir el país como le agradaría”.

Nuestra hipótesis es que a raíz de esa situación se halla en que ninguna de las clases sociales que lidera los polos de la contradicción principal (capital monopolista/proletariado industrial) y que son por ello objetivamente dominantes en su respectivo campo de alianzas ha logrado transformarse en hegemónica de un bloque de fuerzas sociales.

El golpe de Estado del 28 de junio de 1966 significa en la historia política argentina algo más que un mero relevo de gobierno por vía de la típica insurrección cuartelera latinoamericana: se trata del intento más decidido realizado hasta hoy por la fracción dominante en el nivel económico-social, para superar a su favor una situación de crisis orgánica y transformar ese predominio en hegemonía.

Su punto de partida es, en ese sentido, similar al del alzamiento militar ocurrido en Brasil en 1964. Los resultados sin embargo, han sido distintos: mientras en Brasil el capital monopolista logró, a través de la consolidación de una oligarquía militar-industrial, superar la “crisis de autoridad” en la Argentina la crisis hegemónica se mantiene en los términos iniciales, aun cuando en el nivel económico el predominio del capital monopolista se haya acentuado desde entonces.

Pero esa potencia económica no pudo transformarse en potencia política; los nuevos grupos dominantes en el terreno de la producción no fueron grupos dominantes en el terreno de la producción no fueron capaces de crear nuevas fuerzas sociales estables que los representaran o de utilizar a su favor las preexistentes. Su hegemonía sólo se expresó en la fase en que, dentro de la relación permanente violencia-consenso, predominó abiertamente la primera, es decir, hasta mediados de 1969. Pero cuando esa violencia engendró su

réplica, la fórmula de poder a diferencia del caso brasileño, se desequilibró. El intento por buscar, a partir de ese fracaso, nuevos mecanismos consensuales, tampoco tuvo éxito: hoy, en la escena política vuelven a dominar los desalojados en 1966, con lo que la situación de crisis orgánica que provocó el estallido de la “Revolución Argentina” sigue en pie, agravada para el capital monopolista por la participación que en el bloque político triunfante el 11 de marzo tienen fuerzas que representan abiertamente tendencias socialistas, fuerzas cuya movilización fue decisiva para la victoria electoral, pero cuyo nivel de organicidad es aún bajo.

Los protagonistas centrales de ese movimiento pendular sin triunfadores políticos netos son, en el primer nivel estructural, el capital monopolista extranjero o asociado con el imperialismo; el capital nacional y una rama particularmente importante de éste, la burguesía agraria. Políticamente estos grupos se han expresado predominantemente a través de cuatro actores: los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, la burocracia sindical y una nueva conjunción que llamaremos el “establishment”, integrado por tecnócratas y por representantes directos de capital monopolista que al margen de los partidos, asumen roles de élite política.

La coyuntura arranca con una ofensiva hegemónica del capital monopolista que se consolida, en el primer período de la Revolución Argentina durante el lapso que podríamos personalizar en la pareja Onganía-Krieger Vasena. En esa etapa efectivamente, el predominio del capital monopolista se transformó en hegemonía dentro del bloque dominante, y el capital nacional y la burguesía agraria debieron supeditarse políticamente a él. Ello se logró a través del establecimiento de una nueva fórmula de poder que arrasó con el régimen de partidos y lo suplantó con una coalición entre las Fuerzas Armadas y el establishment, la que se intentó agregar a la burocracia sindical.

Esta fórmula aparecía como la respuesta más coherente en el nivel de las fuerzas sociales para las necesidades que la lógica del desarrollo capitalista venía planteando desde tiempo atrás. Queremos decir con ello que los contenidos del movimiento de 1966 estaban ya larvadamente diseñados cuando encontró su techo, a mediados de la década del 50, el modelo de crecimiento capitalista vigente hasta entonces. A partir de ese momento la historia de las clases dominantes argentinas es la historia, zigzagueante, de la búsqueda de ajustes entre las nuevas condiciones económicas y las estructuras políticas.

Estas nuevas condiciones económicas suponen la necesidad de un proyecto de crecimiento a largo plazo caracterizado por cambios de orientación en la política frente al capital extranjero, frente a la promoción industrial

y frente a la política laboral, tendientes a favorecer un modelo de acumulación adaptado al crecimiento de los sectores monopolistas.

Una orientación de ese tipo en los grupos predominantes de la burguesía es posible comenzar a detectarla, a partir de la crisis de 1952, como un intento dirigido desde entonces a concluir con la política distribucionista y con la ineficacia de las empresas surgidas al amparo del proteccionismo y del proceso inflacionario y a utilizar el poder del Estado para obtener el desarrollo de las economías externas requeridas por su propia dinámica de crecimiento, sólo posibles a través de una acción pública que incrementase las inversiones en obras de infraestructura y, por lo tanto, racionalizara el desempeño del Estado mediante la eliminación de gastos improductivos.

Ese proceso no encontró, durante años, sino ecos adormecidos en el poder político, siendo que, como en todo salto en el desarrollo capitalista el papel a cumplir por el Estado resultaba una variable imprescindible. Finalmente, en 1966, como antes en 1930 y en 1943, fueron las Fuerzas Armadas quienes, encaramándose en el proceso de desarrollo del capitalismo, disolvieron las estructuras políticas anteriores y se transformaron en dinamizadoras de la nueva etapa.

Las Fuerzas Armadas completan así en 1966 un ciclo político cuya primera versión había estallado en 1955 con el derrocamiento del nacionalismo popular peronista, operado cuando tenían lugar los primeros síntomas de la crisis. Desde ese momento, es decir, desde al agotamiento del tramo industrializador sustitutivo de importaciones de manufactura liviana, se planteaban para el futuro del capitalismo en la Argentina dos alternativas básicas. Una, forzar la marcha llevada hasta entonces por el peronismo hacia un modelo de desarrollo basado en una sólida alianza entre el Estado y el capital nacional para estatizar los centros fundamentales de acumulación.

Otra, crea las condiciones para una etapa del desarrollo capitalista en la Argentina, mediante la implementación de políticas que, acentuando la dependencia, fueran capaces de garantizarle a los sectores más concentrados el control de la economía.

Quedaba, por supuesto, una tercera y residual alternativa: la instrumentación de una política de compromisos constantes entre las clases y fracciones de clase dominantes por la que el

Estado se transforma en una suerte de campo neutro donde todas ellas compiten, obteniendo beneficios inmediatos según la fuerza de su presión.

El derrocamiento del nacionalismo popular descartó la posibilidad de un desarrollo vía capitalismo de Estado, pero también condujo al establecimiento de una nueva hegemonía mediante la cual el conjunto de las clases dominantes acatará la dirección del capital monopolista.

En primer lugar, porque en el nivel económico el proceso de predominio de capital monopolista no estaba aún consolidado y el poder de las otras fracciones de clase, en especial la burguesía agraria, era muy grande. En segundo lugar, porque la fórmula de poder se construyó alrededor del consenso que podían prestar los partidos políticos, ligados en su mayoría con los proyectos de capital nacional y la burguesía agraria.

Esta fórmula de poder, en la que los partidos políticos debían jugar un rol protagónico, fracasó: la llamada “Revolución Libertadora” de 1955 fue, quizás, el último intento orgánico de la burguesía agraria por mantener un rol hegemónico en el bloque dominante.

Sobre ese fracaso aparece en 1958, la alternativa de Frondizi. Básicamente el gobierno de Frondizi es un capítulo del proceso de maduración de los intentos hegemónicos de capital monopolista y del afianzamiento de su predominio en el terreno económico, por el aliento dado entonces a la radicación de inversiones extranjeras.

En el plano político la etapa supone la emergencia, en la fórmula de poder que se busca instaurar, de nuevas fuerzas sociales: el establishment, que comienza a asumir roles importantes en el aparato del Estado, y la burocracia sindical. Entretanto, el sistema de partidos políticos es relegado a un segundo plano, hasta el punto que incluso se arrastra a una virtual disolución al propio aparato partidario oficialista: el “frondizismo” es mucho más “desarrollismo” que “radicalismo intransigente”.

El intento de estabilizar una nueva fórmula de poder, sin embargo fracasó. En un plano, porque pese a permitir el avance de capital monopolista sobre las otras fracciones buscó constituirse en factor unificador de conjunto

de la burguesía. La hegemonía de capital monopolista supone el sacrificio de sectores de las clases dominantes; en la experiencia llevada a cabo entre 1958 y 1962 se trató en cambio, de articular una política que mantuviera simultáneamente los niveles de protección para el capital nacional, que siguiera transfiriendo ingresos a la burguesía agraria y que garantizara altos beneficios para el capital monopolista.

Todo ello, en los hechos, se contrarrestaba y traía como consecuencia un acentuamiento de la ineficacia del sistema en términos de su funcionalidad para la fracción predominante. Como modelo, el propuesto por el desarrollismo quedó así como un intento pragmático de compromiso entre todos los grupos dominantes locales y el capital extranjero. A diferencia del ciclo de la Revolución Libertadora, que sólo intentó resarcir a la burguesía agraria y al imperialismo de las pérdidas que le infligiera el nacionalismo popular, el frondizismo proyectó ir más allá y superar los límites ya exhaustos de la industrialización liviana, mediante el pasaje a una etapa de desarrollo de ramas industriales más estratégicas. Pero ese objetivo sólo puede lograrse, en el cuadro de las relaciones capitalistas, entregándole al Estado las llaves de la acumulación o poniendo al Estado al servicio del capital monopolista. Al fracasar en sus objetivos económicos por su incapacidad para consolidar un proyecto consistente, el frondizismo fracasó también en la construcción del esquema del poder: no pudo satisfacer las necesidades que planteaba la coalición con la burocracia sindical ni con las Fuerzas Armadas, no satisfizo totalmente al establishment y no logró construir una alternativa frente al sistema de partidos políticos que se le oponían desde la tribuna parlamentaria. Cuando a principios de 1962 fué desalojado, su legitimidad era nula y el vacío hegemónico se planteaba. Quedaba como saldo, como soporte para la nueva etapa, el fortalecimiento de las posiciones económicas del capital monopolista. Pese a ello, los primeros pasos del régimen militar posfrondizista parecieron marcar una resurrección de la gran burguesía agraria. Duró poco: el ministerio de Economía de Federico Pinedo, en 1962 fué como el último estallido victorioso de una ofensiva de la vieja oligarquía.

Tras ese episodio surge una suerte de “ensayo general” en el que dos de los protagonistas principales del movimiento militar de 1966 aprontan sus efectivos; la constitución de una nueva élite político-militar, el ascenso a funciones de gobierno de una burocracia formada por tecnócratas y asesores del capital monopolista, esto es, la coalición entre establishment y Fuerzas Armadas que caracterizará el primer tramo de la Revolución Argentina, tiene su anticipo en el gobierno de José María Guido, entre 1962 y 1963.

Pero esta élite no estaba, sin embargo, lo suficientemente fortalecida en 1963 como para otorgar salida hegemónica a un proceso que en lo económico ya estaba maduro. Es sobre la base de esta reiteración de una vacancia, que los partidos políticos resurgen de sus cenizas y forjan el gobierno de Arturo Illia; tras ellos el capital nacional y la burguesía agraria, sus tradicionales soportes históricos, recuperan posiciones perdidas y, entre 1963 y 1966, jaquean, a veces con éxito, al capital monopolista que carecía de expresión política estable.

Pero este triunfo de los partidos políticos y de las clases que son expresadas por ellos debía ser efímero: iba a contramano de la lógica del desarrollo capitalista, suponía un desfase demasiado grande entre economía y política.

Los partidos políticos, como categoría institucional, suponen la vigencia de un sistema particular de toma de decisiones. Ese sistema incluye, básicamente, un escenario y determinadas condiciones para su constitución: el escenario es el parlamento y su condición de existencia, la consulta electoral periódica. En la Argentina, dadas las características de reclutamiento de la “clase política”, los partidos tienden a ser la expresión política predominante del capitalismo nacional, urbano y rural.

El parlamento es así una tribuna en la que confluyen múltiples intereses “particularistas”, el único recinto en el que las clases y fracciones de clase económicamente subordinadas en la alianza dominante pueden llegar a predominar políticamente. En esa suma de intereses particularistas expresados en el parlamento, se incluyen también los del capital monopolista, pero la condición para su coexistencia es el estado de compromiso permanente. Un compromiso que debe abarcar además, en alguna medida, a las clases populares, porque las consultas electorales periódicas suponen la asunción, aunque fuere retórica, de intereses “universalistas”. En el parlamento, el capital monopolista es llevado a la mesa de negociaciones y su presencia en ella es subordinada. La elaboración de un proyecto hegemónico no pasa por su presencia en ese escenario: se desplaza hacia otros centros de decisión política: las Fuerzas Armadas, la tecnocracia ubicada en el aparato del Estado y la burocracia sindical, con la que está relacionada por el “toma y daca” del conflicto económico.

El proceso lleva a los partidos políticos y a las instituciones en que ellos actúan a girar en el vacío. Un resultado que en la Argentina no fue difícil de conseguir dada, por añadidura, la situación de proscripción política de las grandes masas populares que no se sentían representadas a través del sistema de partidos. Este hecho, sumado a la carencia de representatividad de los intereses económicamente predominantes, llevó en 1966 al completo desgaste institucional.

Cuando en junio de ese año los militares toman por asalto el poder y utilizan como una explicación de su alzamiento el deterioro de los partidos políticos decían una verdad: su “crisis de autoridad” era total. La acumulación de capital, el incremento de la eficacia del sistema económico, la racionalización de las actividades públicas, eran demandas que se

asentaban sobre la lógica del desarrollo capitalista: ellas imponían nuevas políticas, contradictorias con las aspiraciones de las masas populares y con los intereses de las clases económicamente subordinadas de bloque dominante. No estaba en la capacidad del sistema de partidos asumir esas tareas: es a ese cuello de botella político de desarrollo capitalista que el golpe de junio viene a poner fin.

A LA BÚSQUEDA DE UNA NUEVA HEGEMONÍA

El plan monopolista en la economía tiene como correlato, en la política, a un modelo de Estado autoritario que concentre el poder asociando los núcleos de decisión económica con los de decisión política. La nueva organización del capitalismo, en la que el Estado debe jugar un fuerte papel intervencionista como dinamizador de la economía, obliga a concentrar el poder fragmentado. El Parlamento —institución concurrencial en la que los partidos son portadores de las presiones de todas las fracciones en que se divide la clase dominante— pierde así vigencia: en ese mercado político, desfasado con respecto al mercado económico, los desplazados suelen ser los vencedores. La lógica del desarrollo monopolista no tolera ese desencaje entre economía y política: el Parlamento y los partidos, por ello desaparecen o se subalternizan y en su lugar emerge la autoridad presidencial y la presencia de los tecnócratas y aun de los propios gerentes del capital en las cúspides de la burocracia.

Esta ley se expresa en cada sociedad según características particulares. En la Argentina de 1966 fueron las Fuerzas Armadas sus agentes desencadenantes, al tomar el poder para garantizar, de hecho, las condiciones políticas de la dominación monopolista. Al lado de las Fuerzas Armadas, la nueva hegemonía quiso fundarse con el agregado de otras dos fuerzas sociales: el establishment y la burocracia sindical. En esa asociación debía encontrarse una fórmula de poder que fuera expresiva, en el plano político, de la etapa capitalista monopolista dependiente. Pero ese alineamiento nunca pudo estructurarse como una verdadera coalición, con lo que el proyecto hegemónico manifestó siempre extrema vulnerabilidad hasta estallar, por fin, en 1970: enfrentados a una fusión de contradicciones que abarcaba a fracciones desplazadas pertenecientes a las clases dominantes y al conjunto de las clases dominadas y que se expresaba en lo económico, en lo político y en lo ideológico, los soportes socio-políticos del plan monopolista vacilaron, volviendo a crear un vacío de autoridad.

En su discurso de marzo de 1967 anunciando la nueva política económica, Krieger Vasena, cabeza del establishment asentado en el poder, había fijado los rasgos del proyecto y

anticipado sus consecuencias sociales: “Lo que buscan las autoridades del país es evitar la transferencia de ingresos en gran escala de unos sectores a otros. Dentro de cada sector se desea premiar a los más eficientes y que este premio sea el resultado de su propio esfuerzo”. (11)

El reinado del capital monopolista, entendido como proyecto racionalizador del sistema, supone —y ese era el sentido de las palabras de Krieger Vasena— la eliminación de lo periférico, de lo “artificial”. Si la primera etapa de industrialización, a través de la sustitución de importaciones, permitió la coexistencia de distintas fracciones de las clases dominantes gracias a que, en el marco de un rápido crecimiento de las fuerzas productivas, todas tuvieron asegurado el acceso a una porción del mismo, la etapa monopolista supone, en cambio, tensiones y rupturas graves en el interior de los sectores propietarios.

No repetiremos acá un análisis de la implementación del plan monopolista en cuanto hace a sus mecanismos económicos, aspectos sobre el que existe ya una importante bibliografía: nuestro objeto son sus consecuencias sociales y, por lo tanto, la forma en que se redefinen campos de interés y se desplazan los puntos de ruptura políticos.

Si desde la perspectiva de los asalariados el plan monopolista trae apareada una política de shock que desde sus primeros tramos rebaja brutalmente sus ingresos reales, en el interior de las clases dominantes la hegemonía de la fracción monopolista en la Argentina 1966 supuso una transferencia en la distribución de la plusvalía en perjuicio de la burguesía pequeña y mediana y de la llamada “oligarquía agropecuaria”, proceso al que se superpuso un flujo constante de ingresos en favor del Litoral en detrimento del Interior.

Una política de tal modo agresiva, que busca quebrar una situación de “empate”, no puede desatarse sino a través del respaldo de la violencia desnuda, montada sobre una estructura vertical, autoritaria del Estado. El supuesto teórico —en la medida en que la pura violencia no puede sostenerse como una situación “normal” en una sociedad compleja— es que los primeros “sacrificios”, tras una etapa de disciplina forzosa pueden superarse a no muy largo plazo y crearse las bases para una ampliación del consenso.

En efecto, es condición para la realización política del modelo, que los reajustes en el nivel económico lleven a una racionalización y “modernización” del sistema social, capaz de generar una rápida expansión de las fuerzas productivas, una acumulación de riqueza con la que se podrá “premiar” luego, selectivamente, a distintos estratos en términos de su comportamiento eficiente.

Este supuesto es el que le da sentido al esquema de los “tres tiempos” formulado en 1966 por los teóricos de la Revolución Argentina. En realidad, el “tiempo económico”, el “tiempo social” y el “tiempo político” por los que debía atravesar ordenadamente la sociedad, pueden ser traducidos como una sucesión ideal de dos etapas: en el modelo monopolista operaría primero un momento de Acumulación (de riqueza y poder) que supone el sostén del autoritarismo armado a la reestructuración económica en beneficio de los monopolios y un momento posterior de Distribución en el cual, diferencialmente, se repartirían entre otros sectores porciones de la riqueza acumulada y se regularían formas controladas de participación de esos sectores en el poder.

El plan monopolista organiza así una carrera contra el tiempo y su éxito o su fracaso dependen de la velocidad de movimiento de dos factores: el rechazo al proyecto por parte de los perjudicados y la recolección de los frutos del plan, para permitir los necesarios reajustes consensuales. En la Argentina el primer factor desbordó al segundo obligando, desde mediados de 1969, a un repliegue del proyecto hegemónico monopolista, ante una convergencia de variables económicas, sociales y políticas que acumularon diversos puntos de ruptura. Los principales soportes político-sociales del plan de los monopolios, que podían acompañar al establishment en la estructuración del nuevo proyecto hegemónico — las Fuerzas Armadas y la burocracia sindical— vacilaron frente a la marea de contradicciones concentradas: el “Cordobazo” hirió de muerte a esta primera versión de la hegemonía monopolista.

LA NUEVA CRISIS POLITICA

Efectivamente, el Cordobazo del 29 de mayo de 1969 desnuda la fragilidad del nuevo proyecto hegemónico e inaugura, a nuevos niveles, otra etapa de crisis política. Pero la diferencia con 1966 es notoria: ahora la crisis es primordialmente social; supone un estado general de movilización de las clases populares, en el que aparecen formas orgánicas de contenido socialista como primera respuesta a las nuevas contradicciones sociales argentinas. Es a partir del Cordobazo que la lectura de la crisis puede caracterizarse legítimamente no sólo en término de los conflictos en el interior de las clases dominantes, sino también como “situación revolucionaria” en la definición leninista: cuando las masas son empujadas “a una acción histórica independiente”.

Por eso la crisis actual coloca en primer plano para las clases dominantes y las fuerzas sociales que las expresan el problema del control de esa movilización, en tanto ésta es el embrión de un nuevo movimiento social que busca aún su expresión política orgánica. Por eso también en esta etapa “pre-política” del nuevo movimiento social en que las fuerzas que buscan expresar los intereses de las clases populares se hallan fragmentadas en un mosaico de experiencias, no es “espontaneísta” considerar que la dirección socialista de un proceso se mide más por las posibilidades objetivas que tenga el mismo de alentar la movilización existente en el interior de las masas explotadas por el sistema capitalista dependiente, que por la perfección de los programas o la prolijidad de los métodos de organización.

Para las clases populares, la crisis que se abre en 1969 origina respuestas autónomas que, sin embargo todavía hoy, se expresan más en el plano “social” que en el “político”.

Para el capital monopolista la crisis obliga a rehabilitar el espacio de la política, en tanto es en él donde aparecen como posibles todavía —aunque cada vez más limitadamente— tentativas de integración que el plano económico-social rechaza. Esa reivindicación de un escenario que en 1966 se creyó clausurado, equivale a la principal derrota del proyecto hegemónico del capital monopolista, aprovechada por las otras clases dominantes que habían sido subordinadas durante el primer tramo de la Revolución Argentina.

El primer desertor en la aplicación de las formas “puras” de la dominación neocapitalista dependiente fué el propio aparato militar. Al asumir el poder en 1966, las Fuerzas Armadas justificaron la intervención en base al planteo de objetivos trascendentes, en términos de “empresa nacional”. No se evocaron entonces —al menos de manera principal— necesidades de defensa del Orden frente a la Subversión, sino fines positivos: “modernizar” el país, encauzarlo hacia la “grandeza” superando la parálisis a que lo habrían llevado las pujas facciosas, intersectoriales, encarnadas en los partidos políticos. Así lo razonaba la retórica del “Mensaje de la Junta Revolucionaria al Pueblo Argentino” emitido el 28 de junio de 1966: “Hoy, como en todas las etapas decisivas de nuestra historia, las Fuerzas Armadas interpretando el más alto interés común, asumen la responsabilidad irrenunciable de asegurar la unión nacional y posibilitar el bienestar general, incorporando al país los modernos elementos de la cultura, la ciencia y la técnica, que al operar una transformación substancial lo sitúen donde le corresponde por la inteligencia y el valor humano de sus habitantes y la riqueza que la Providencia depositó en su territorio”.

En la literatura militar de la época, el programa era presentado de manera más particularizada. Uno de los teóricos del golpe, que al asumir el nuevo gobierno fué designado secretario del Consejo Nacional de Seguridad, el general Osiris Villegas, consideraba que la Revolución Argentina debía encarnar un nuevo “proyecto nacional” destinado a reemplazar el vigente desde fines del siglo anterior. “Estamos viviendo —decía— la finalización del período de transición del país agrícola-ganadero, de estructura

armónica dependiente, hacia el país industrializado”. Y agregaba: “No puede trazarse una política fundada en el interés nacional si no se reconoce la situación argentina de país en vías de desarrollo. Este es un concepto económico que hace al tipo de estructura de producción que tiene el país. La política fundada en el interés nacional supone el esfuerzo acelerado para transformar esa estructura de producción en una similar a la de las sociedades industriales. Exige la construcción de industria básica, la promoción de las actividades de la nueva revolución industrial, de la energía nuclear, la electrónica o la cibernética. Reclama la revolución técnica en el campo. Supone, simultáneamente, un gran esfuerzo tecnológico que coordine los esfuerzos de la universidad, las empresas y el Estado en la tarea de modernización”. (12)

Todo este “mesianismo” se resolvió con la asociación entre el Estado y el capital monopolista, como sustento de la modernización y la grandeza.

Pero esta sociedad no puede ser visualizada como un simple “arreglo” entre intereses inmediatos coincidentes. En la medida en que las Fuerzas Armadas constituyen una fuerza social, sus relaciones con el universo de las clases se hallan mediadas por la ideología. Como institución del Estado en la que la especificidad de sus funciones debe ser justificada en términos de las necesidades de la Nación y no de sus parcialidades, las Fuerzas Armadas siguen siempre una determinada “doctrina”, que le otorga sentido a sus acciones y en la que tratan de socializar a sus cuadros. Es a través de esa ideología que puede reconstruirse la relación de las Fuerzas Armadas con otras fuerzas sociales y, por lo tanto, la coincidencia o disidencia con intereses de clase, expresadas como “proyecto”.

Durante todo un largo período —especialmente a partir de los años 40— la doctrina militar predominante estaba basada en el concepto clásico de “Nación en armas” y en la hipótesis de guerra provocada por un enemigo externo a las fronteras geográficas. Ponía énfasis por o tanto, no sólo en la necesidad de autosuficiencia económica —o que derivaba en reclamos de proteccionismo industrial y de impulso a una industria pesada que pudiera resolver los problemas específicamente profesionales de abastecimiento— sino también en la necesidad de control nacional sobre el sistema de decisiones globales de la economía. Esto llevaba a reforzar los roles del Estado y a concebir la política económica como política de protección de la economía como un todo. El grueso de la literatura militar de esos años parte de un doble supuesto: no hay defensa nacional posible sin base industrial propia; esa base industrial no implica solamente crecimiento económico sino también el control estatal sobre las decisiones básicas de inversión.

Hacia los años 60 esa doctrina cambia. Tras un período de “vacío” en que las Fuerzas Armadas se desintegran en pugnas internas, un nuevo proyecto, cuyas condiciones organizacionales son planteadas por los llamados

“azules” en 1962-63, reemplaza al anterior como dador de sentido para el comportamiento militar. La interconexión entre Seguridad y Desarrollo será desde entonces la nueva clase estratégica presentada por los militares como “empresa nacional”.

El enemigo se ha “interiorizado”; el enfrentamiento básico tiene lugar dentro de las fronteras y la “guerra subversiva” es el nuevo tema de preocupación. La función principal de las Fuerzas Armadas es garantizar la Seguridad dentro de las fronteras. A partir de esto, si se mantiene el énfasis sobre la necesidad de crecimiento industrial —porque éste es un respaldo, al disipar tensiones sociales, de la seguridad— pasa a segundo plano el principio del control nacional sobre las decisiones económicas; no importa tanto quién dirige el desarrollo; lo decisivo es que la nación se modernice.

En 1966, el jefe del Estado Mayor General del Ejército planteó en una conferencia militar continental, estos principios. “El desarrollo puede definirse como la expresión de un conjunto de cambios en las estructuras mentales y en los hábitos sociales de un pueblo que lo pone en estado de aumentar en forma permanente su producto real global. El desarrollo es a la seguridad lo que la causa al efecto, el origen a la consecuencia, lo principal a lo secundario. Sin desarrollo la seguridad es utopía tanto en el orden particular o nacional como en el orden general o internacional”. (13)

Estos cambios en la orientación estratégica de las Fuerzas Armadas, pegadas al esquema cosmopolita de “bipolaridad mundial” planteado por el Pentágono, que relega a los ejércitos de los países independientes a funciones de policía interna, coinciden en la Argentina con la crisis del modelo de industrialización sustitutiva y con la consolidación de poderosos sectores oligopólicos en las ramas más dinámicas de la industria. En su urgencia por el Desarrollo como garantía de la Seguridad, las Fuerzas Armadas parecen encontrarse con la única posibilidad para sacar al país del estancamiento: poner en práctica las políticas diseñadas por el capital monopolista ya que, si no se plantea la alternativa de que sea el Estado quien tome en sus manos la responsabilidad principal del crecimiento económico, la tarea deberá recaer forzosamente en los sectores privados más poderosos y concentrados, los únicos que tienen la posibilidad de dinamizar un proyecto económico.

Este esquema funcionó satisfactoriamente en el primer período de la Revolución Argentina, como lo señalara uno de los principales propagandistas civiles de la nueva coalición: lo que estaba consolidándose en la Argentina era “una oligarquía político-militar-empresaria,

empeñada en asegurar el proceso de industrialización a través de grandes inversiones en la infraestructura y dispuesta a contener, por lo tanto las prematuras presiones de los sectores populares”. (14)

Pero este proceso no se desarrolló libre de tensiones, tensiones que sólo hubieran podido ser relegadas con la presencia visible de efectos económicos favorables, que permitieran el rápido pasaje del “tiempo económico” al “tiempo social”.

En el tercer año de vigencia del plan, las Fuerzas Armadas se encontraron con que la suma de obstáculos políticos y sociales que imponía la “grandeza” por esa vía era tal, que determinaba costos demasiados elevados y, por añadidura, hacía más vulnerable aún la seguridad.

Los reclamos del capital mediano y pequeño y de la burguesía agraria; las explosiones regionales que abarcaban zonas de desigual desarrollo económico, político y social; la situación de exasperación de los asalariados que desbordaba, en los hechos, los intentos conciliadores de la burocracia sindical y el descontento generalizado de la pequeña burguesía expropiada políticamente y sometida a una creciente pauperización, crearon una acumulación de fuerzas opositoras al proyecto monopolista tan poderosa, abrieron una crisis social tan honda, que precipitó la fractura de monolitismo militar: a través de esas grietas se filtró el reclamo político de las otras clases propietarias, subordinadas desde 1966 al capital monopolista. Había fracasado la posibilidad de consolidar una oligarquía militar-industrial que hiciera compatibles los intereses de las Fuerzas Armadas con los de los grupos más concentrados de la industria y las finanzas, verdadera clave del proyecto hegemónico neo-dependiente, tal como lo certifica contemporáneamente el caso brasileño.

Desde ese momento la ecuación que relacionaba Seguridad con Desarrollo, depositando a éste en manos del capital monopolista, comenzó a perder sentido; la Revolución Argentina dejó de aparecer como realización de

ese proyecto nacional que las Fuerzas Armadas se habían propuesto en 1966. El tema de la Seguridad, a secas pasó a ser prioritario, para conjugarse a partir de entonces con modelos políticos de salidas institucionales, más que con modelos económicos de acumulación.

La mayor velocidad que adquirió la conjunción de intereses contrapuestos al plan, en relación con la lentitud en el pasaje del “tiempo de la acumulación” al de la “distribución” enajenó también al otro soporte prevista por el modelo neocapitalista de desarrollo: la burocracia sindical.

Uno de los presupuestos de la dominación del capital monopolista es el control de la fuerza de trabajo. Y si ese objetivo pasa por una primera etapa de disciplina forzosa asegurada por la violencia, reconoce una segunda de “participación”. La clave, para la primera fase, es la eficacia de la política de ingresos, esto es, el poner en marcha las mejores condiciones para la acumulación de capital en favor de los grupos más concentrados de la economía. “El eficiente funcionamiento de la política de ingresos —señala Krieger Vasena— es primordial para el desarrollo con estabilidad y aun cuando aisladamente cada uno pueda pretender más de lo que le corresponde en esta transición, el gobierno ha de mantenerse inflexible ante presiones que, analizadas en conjunto y desde un plazo superior, no son atendibles.”

En la segunda etapa, una vez sometida políticamente, la burocracia sindical, la orientación del Estado no consiste en procurar su desaparición o su debilitamiento institucional, sino su subordinación al plan del capital como un mecanismo consensual importante, como un reaseguro contra la movilización popular.

La estrategia del capital monopolista incluye como supuesto la posibilidad de promover la existencia de sectores obreros privilegiados que pueden conseguir que en las ramas industriales de más alta productividad se paguen salarios mayores que en aquellas con menor desarrollo tecnológico. De esta expectativa pudo participar un sector de la burocracia sindical, pero en realidad fué distinta; en el período 1966-68 el bloque salarial perjudicó tanto a unos como a otros, acentuando la homogeneidad de la clase obrera como grupo explotado por el capital (15). Al cumplirse los dos años de la Revolución argentina ninguna fracción dentro de los trabajadores podía ser computada como soporte objetivo de la coalición con que el capital monopolista buscaba fundar su hegemonía.

Sin embargo, en junio de 1966, al ser derrocado el gobierno legal, la burocracia sindical no ocultó un prudente entusiasmo. “El movimiento militar que el 27 de junio tomó el poder —dice una declaración de la CGT del 29 de ese mes— constituye un hecho nuevo e históricamente asume una gran responsabilidad, ante la atenta expectativa que indiscutiblemente ha concitado en el país”. Los primeros pasos del nuevo gobierno parecen incluso, satisfacer algunas de sus esperanzas de coparticipar de la situación política creada, confirmando la impresión de que podrían ser reconstruidos los lazos —rotos desde 1955— entre burocracia sindical y Fuerzas Armadas.

Ese clima duró poco, sin embargo. La primera ofensiva brutal descargada por los militares en el poder tendió a dismantlar drásticamente las zonas de “ineficiencia” del sistema económico: trabajo en los puertos, ferrocarriles, industria azucarera tucumana. El golpe, aún era selectivo. La burocracia sindical trató de mantener las negociaciones, especulando con la posibilidad de ganar para sí a los sectores “nacionalistas” del elenco gubernamental y de las Fuerzas Armadas. Pero la designación de Krieger Vasena como ministro de Economía, a fines de 1966, desvanece todos los sueños: la presencia de ese gerente de los monopolios como arquitecto del plan económico de la Revolución Argentina, confirma que las Fuerzas Armadas han decidido transformarse en sostén del neocapitalismo dependiente.

En marzo de 1967 la CGT se rinde frente a la fuerza militar y levanta un paro general de 48 horas. Pocos días después recibe el golpe de gracia: Krieger Vasena liquida por dos años las convenciones colectivas de trabajo, estableciendo que durante ese período será el Estado quien fije los ingresos de los asalariados. La burocracia sindical pierde así toda influencia en el mercado de trabajo, viéndose compelida a ocuparse solamente de cuestiones mutuales o asistenciales. El arma poderosa que significaba discutir cada año los salarios y las condiciones de trabajo es quitada de sus manos.

A partir de ese momento y hasta la crisis social y política de 1969-70, la burocracia sindical, doblegada por el poder, se repliega. Un sector, el vanderista, se aísla de gobierno, pero no lo combate. Otro, el llamado participacionista, insiste en mantener lazos con las Fuerzas Armadas, a partir del supuesto de que éstas pueden ser aisladas del establishment. La pretensión resultó absolutamente vana. Entre 1966 y 1969 la homogeneidad

de la coalición Fuerzas Armadas-establishment fue casi perfecta y el papel adjudicado a la burocracia sindical era el de la subordinación: en la medida en que mantuviera la desmovilización de los trabajadores podía obtener, como categoría, concesiones aisladas, frutos de la corrupción que el poder prodiga.

Hasta 1969, en que el proceso sufrió un viraje, la burocracia sindical fue, pasivamente, un instrumento del plan de los monopolios. Como la burguesía media, con la que ha fusionado su proyecto político, fué forzada al repliegue. Si en 1966 el total de jornadas perdidas por conflictos de trabajo fué de 1.912.826 (de los cuales 1.542.933 lo fueron en los seis primeros meses), en 1967 la cifra descendió a 244.844 jornadas y en 1968 a algo más de 23.500, el valor más bajo desde 1956.

Sólo el debilitamiento del poder y la crisis política posterior al Cordobazo, que tenderán a aislar al establishment de las Fuerzas Armadas y a rehabilitar el peso de los partidos políticos, y con él la influencia del viejo capitalismo urbano y rural, alentará nuevamente a la burocracia sindical. Para obtener un grado de consenso que ayude a dar salida a la crisis de 1970, cuando la violencia “pura” se había mostrado insuficiente como garantía de desmovilización, la burocracia sindical es nuevamente convocada. Rota la coraza de coerción con que los militares habían protegido la hegemonía del capital monopolista, las otras clases dominantes subordinadas entran en la mesa de negociaciones; deben ser aceptadas como partes.

A partir de allí crece otra vez la influencia política de la burocracia sindical, en tanto ella se transforma en el eje de coincidencias económico-sociales entre los representantes directos del capital nacional y los partidos políticos, expresadas en los sucesivos pactos programáticos entre la Confederación General Económica (CGE), la Confederación General del Trabajo y los principales partidos políticos. Esos pactos, en los que la burocracia sindical ha jugado un rol primordial, expresan las expectativas de reingreso al poder de las clases propietarias subordinadas en 1966.

La burocracia sindical en la Argentina opera así su pasaje histórico de las posiciones del “reformismo obrero” a las de “reformismo burgués”, insertándose explícitamente en el sistema del capital. Esta calificación que, en general, parece válida para el sindicalismo en casi todas partes tiene, en el proceso social argentino, aspectos particulares que deben ser destacados.

En primer lugar parece necesario agregar que se trata de una de las instituciones con mayor poder en la sociedad civil; un poder que hace valer en el espacio político a partir de su número, de su capacidad de convocatoria y de su riqueza de recursos económicos.

Además, ese poder se ha fundado sobre características muy precisas de la historia posterior al derrocamiento del nacionalismo popular en 1955: la burocracia sindical ha debido asumir, desde entonces, dos papeles: el clásico de negociación de las condiciones de venta de la fuerza de trabajo y otro “sui generis”, determinado por la proscripción del peronismo, que transformó a los sindicatos en los principales representantes políticos de la clase trabajadora.

Ambos papeles —uno, “político”; otro, “profesional”— sólo se separan abstractamente: las condiciones concretas de funcionamiento del aparato sindical entrelazan permanentemente

ambas funciones, tornando a menudo, contradictorios a sus comportamientos. Por un lado, “profesionalmente”, debe justificar su condición de columna vertebral del nacionalismo popular en un proceso que busca la restauración en el poder.

En este andarivel peligroso que combina el diálogo con la oposición, aparece una determinación cuyo peso es decisivo para entender las actitudes de la burocracia sindical: la dependencia con relación al Estado, cualquiera que sea el bloque de fuerzas que lo controle.

El peso del Estado sobre la burocracia sindical es enorme y las armas legales para controlar sus pasos abarcan todos los grados: desde la intervención lisa y llana por funcionarios gubernamentales hasta el ahogo económico por el bloqueo de sus fondos. Un eje decisivo de la actividad de la burocracia sindical pasa, por lo tanto, a través de sus relaciones con el poder político, para impedir que éste ponga en marcha medidas “disciplinarias”, económicas o administrativas.

Todo ello obliga a que la burocracia sindical despliegue siempre una estrategia tendiente a compartir del poder; esto es, que busque, más allá de sí misma y de sus componentes corporativos, coaliciones con otras

fuerzas sociales. Pasado el llamado período de la “resistencia peronista”, toda la trayectoria política de la burocracia sindical se estructura con el objetivo de terminar con el “aislamiento” abierto en 1955 y recuperar su influencia sobre el aparato estatal, a través de la búsqueda de coaliciones con otras fuerzas sociales. Un jalón de ese proceso es la restitución que, en 1961, el desarrollismo en el poder efectúa de la CGT, intervenida desde 1955, devolviéndole a los dirigentes gremiales parte del poder de regateo político del que habían sido despojados tras el derrocamiento de Perón.

Esa política de alianzas desplazada por la burocracia sindical marca una clara línea de tendencia. El “modelo de sociedad” y las medidas económico-sociales que propugna la CGT desde los años 60 hasta la actualidad, no difieren virtualmente de los reclamos del capital nacional, agrupado en la CGE. Un análisis de esa orientaciones nos llevaría a comprobar que el objetivo político de la burocracia sindical es recrear las condiciones que contribuyeron a la gestación de la coalición sobre la que se fundó el peronismo, a mediados de la década del 40: sus interlocutores principales para ese fin no pueden ser otros que los representantes del capital nacional y los grupos nacionalistas de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, el “nacional desarrollismo” programático de la CGT supone algo más que un movimiento táctico o una decisión oportunista: es la forma específica en que la burocracia sindical busca asumir la representación política de las masas peronistas; es su proyecto histórico de largo plazo el modo de su inserción en la política de poder. Todo ello, claro

está, de manera insanablemente más mediocre que en 1945: ni esta burguesía es la de entonces, ni estas Fuerzas Armadas son las de entonces; ni esta burocracia sindical está inspirada en el reformismo movilizador de los dirigentes gremiales de la década del 40.

El proyecto hegemónico del capital monopolista no es el mismo que posee la burocracia sindical, ni siquiera por parte de quienes fueron llamados “participacionistas” y buscaron permanentemente la negociación con Onganía. Sin embargo, es un hecho que alentaron el golpe de 1966 y que se rindieron en la etapa más dura de la Revolución argentina, sin movilizar consecuentemente sus fuerzas. ¿Por qué es la complicidad con un proyecto que no compartían? Las razones de diverso nivel, ilustran el complejo papel que la burocracia sindical cumple en la sociedad argentina.

Desde el punto de vista de sus proyectos políticos a largo plazo ya descriptos, un elemento importante para explicar la tregua concedida es el carácter militar del gobierno de Onganía. Para el nacional-desarrollismo de los sindicatos, las Fuerzas Armadas constituyen sus principales aliados; los copartícipes con quienes se busca negociar toda propuesta tendiente a reconstruir la coalición gobernante entre 1946 y 1955.

Otro elemento es la dependencia que la burocracia sindical tiene frente a quienes controlan el poder político, a fin de asegurar su supervivencia como institución. Basta la modificación de un artículo de un reglamento, para que la riqueza económica de los sindicatos se desintegre. Quienquiera que esté en el poder puede lograr, siempre que lo controle efectivamente, alguna forma de “colaboración” de la burocracia sindical.

Pero esto sería insuficiente, porque omitiría el análisis de algunos aspectos específicos de la complicada trama de relaciones que se establecen entre la burocracia sindical — considerada ahora en su dimensión “profesional”— y el capital monopolista en momentos en que este sector consolida su hegemonía sobre el resto de las clases dominantes, subordinando a los sectores que la burocracia sindical estima como sus principales aliados políticos. El sindicalismo argentino, en tanto ha abandonado el “reformismo obrero” por el “reformismo burgués”, ha integrado su suerte a la del capitalismo. El hecho de que, en el interior de esa elección, prefiera como garantía para sus intereses —no sólo sociales sino políticos— al modelo nacional-desarrollista de la burguesía media, que busca negociar la dependencia, no impide que esa actitud pueda ser relativizada coyunturalmente. Como la ofensiva hegemónica del capital monopolista arriba a su punto más alto, acorazada tras todo el peso del poder militar, importantes sectores de la burocracia sindical, especialmente los ligados a las grandes empresas, partiendo de lo que perciben como “solidez” casi invulnerable del proyecto neocapitalista, tratan de negociar por su cuenta a fin de obtener el mejor partido posible de la nueva situación. Si el capital monopolista hubiera ganado la

carrera contra reloj planteada desde 1966 entre el “tiempo de acumulación” y el “tiempo de distribución” y hubiera podido, por lo tanto, introducir cuñas objetivas de diferenciación en el interior de la clase trabajadora, es altamente probable que la burocracia sindical se hubiera fragmentado también, a partir de la contraposición de dos modelos distintos de participación en el desarrollo capitalista.

Pero, cuando el conjunto de la clase trabajadora estalla en movilización contra el sistema y plantea, borrosamente, la construcción de una nueva oposición social, haciendo trastabillar el “milenario” que Onganía buscó

construir a través de la coalición entre Fuerzas Armadas y establishment y obliga a un repliegue del capital monopolista en el plano político la burocracia sindical retoma sus proyectos originales. Desde ese momento, en conjunción con los empresarios de la CGE, subraya su autonomía frente al capital monopolista y se transforma en el núcleo social destinado a marcar los horizontes del reformismo rehabilitado tras la crisis de 1970:

Explícitamente desde entonces el programa económico-social conjunto de la CGE y la CGT unifica a todos los partidos y Fuerzas Armadas, como propuesta reformista tendiente a fortalecer el sistema político.

De retorno del fracaso hegemónico del capital monopolista, el sindicalismo es hoy el principal soporte para poner en marcha cualquier programa reformista de dependencia negociada entre el capital monopolista y el capital nacional, cuyos actores sociales principales deberán ser los partidos políticos, las Fuerzas Armadas y la burocracia sindical. El principal soporte, porque el acuerdo deberá basarse, ya no en una desmovilización de las masas a través de la violencia desnuda, sino en la posibilidad de controlar la movilización existente, a partir de instrumentar formas reformistas que permitan un mínimo consensual.

LOS OBSTACULOS PARA LA “BRASILEIZACION”

El eje de sentido de este análisis de la crisis argentina son las contradicciones secundarias, internas al capitalismo. La elección —ya ha sido señalado— no implica transmutar estos antagonismos en los principales en el nivel social, sino a marcar el peso predominante que los mismos efectivamente tienen aún en el espacio político. Lo que interesa destacar es la capacidad de resistencia política que, a través de distintas fuerzas sociales, tiene en la

Argentina el viejo capitalismo urbano y rural frente al proyecto hegemónico neodependiente.

La literatura económica, sociológica y política corriente sobre la dependencia en América Latina, tiende a enfatizar —casi siempre por la proximidad empírica que en relación a sus análisis teóricos tiene el caso brasileño— dos aspectos complementarios. Por un lado, la virtual desaparición, como fuerza con capacidad de iniciativa política, de la burguesía no monopolista. Por el otro, la disolución de los movimientos populistas. Ninguna de esas dos proposiciones que, vistas por el historiador futuro pueden ser válidas, permiten explicar la coyuntura política argentina. Las fuerzas polares que se enfrentan en la contradicción social principal no tienen una expresión política eficaz, y ese escenario está primordialmente ocupado por representantes de proyectos que, residuales desde el punto de vista del desarrollo económico-social, acumulan un enorme poder de veto político aunque no tengan similar fuerza para poner en práctica sus decisiones. Este es el rasgo político que diferencia a la Argentina del resto de Latinoamérica, especialmente de los dos modelos “límite” que suelen utilizarse como punto de referencia para medir las relaciones entre las nuevas formas de dependencia imperialista y las fuerzas sociales locales: Perú y Brasil.

El caso brasileño es el más interesante para intentar un sumario análisis comparativo. Como hemos señalado, la “Revolución Brasileña” de 1964 y la Revolución Argentina de 1966 tienen puntos de partida similares: la voluntad de establecer un sistema burocrático-autoritario para instrumentar un desarrollo de las relaciones capitalistas bajo la hegemonía de la burguesía monopolista.

Sin embargo, a medida que el proceso fué desarrollándose en la Argentina, las dificultades para viabilizarlo aumentaron su intensidad hasta hacerlo fracasar políticamente. Si es cierto que la determinante de ese fracaso fué la resistencia activa de las clases populares, también lo es que el principal beneficiario político de la crisis es el reformismo burgués, expresado en los partidos políticos y en la burocracia sindical y sostenido en los límites que traza el proyecto posible de la burguesía no monopolista, económicamente a la defensiva pero políticamente a la ofensiva. (16)

Entre 1967 y 1968, al cumplirse el primer trienio del golpe de Estado dado por los militares brasileños, una crisis similar a la que estalla en la Argentina en 1970, se instala en el sistema político de ese país. El año 1968 es, en Brasil, un año de escalada en la ofensiva de los perjudicados por la nueva situación: grandes movilizaciones estudiantiles, extensión de las luchas obreras, primera aparición de la guerrilla y consolidación de toda la oposición civil en el Frente Amplio, una coalición en la que confluye todo el sistema de partidos, desde los comunistas hasta Carlos Lacerda, para jaquear al poder militar.

El desenlace de ese proceso será, sin embargo, el fortalecimiento de la hegemonía del capital monopolista, a través de la consolidación de una oligarquía militar-industrial que barre totalmente a la oposición.

La respuesta que las Fuerzas Armadas pudieron dar entonces a la ofensiva combinada de los políticos tradicionales y del movimiento obrero y estudiantil, consistió en galvanizar aún más el aparato autoritario y forzar la marcha en la realización de los planes económicos neodependientes. La decisión de volcar todo el peso de Estado a favor del modelo de capitalismo monopólico dependiente, fue lo que permitió el llamado “milagro”: a costa de cada vez más marginalidad y diferenciación social y económica, de concentración de la riqueza y aumento de la miseria relativa de las grandes masas populares, el sistema probó su dinamismo, mostrando que sus límites no se hallan en las leyes de la economía sino en los movimientos del sistema político. Si el capital monopolista dispone de Poder necesario para desbaratar las primeras resistencias y acelerar la marcha en lugar de detenerla, puede conseguir éxitos en sus metas desarrollistas.

Esta decisión es la que no pudo implementarse en la Argentina: la crisis social y política de 1969-70 arrastrará a su caída al autoritarismo militar de Onganía y planteará, nuevamente, una situación de vacío hegemónico.

Aunque la dirección causal puede ser discutida, es un hecho que la crisis política de 1970 aparece como punto de partida de un descenso en los indicadores de crecimiento económico que habían manifestado un alza sostenido durante el bienio anterior, en el cual, además, habían descendido significativamente las tasas de inflación. Como ha sido señalado, “el plan Krieger Vasena lleva a la economía argentina a un punto en el que, dadas las situaciones estructurales que condicionaron aquella coyuntura, la única alternativa al desorden económico es la continuidad del plan. Sin embargo, dicha continuidad implicaba acentuar aún más ferozmente la explotación de la clase obrera y la pauperización de la pequeña burguesía el irritar más también la situación de parte de los sectores dominantes, especialmente la oligarquía terrateniente.” (17)

Es decir, que en 1970 la opción dinámica para el sistema hubiera sido, desde la lógica económica, la continuidad del plan, pero esa lógica chocaba contra techos políticos y sociales que no involucraban solamente a las clases populares sino que abarcaban a sectores de la burguesía, lo suficientemente poderosos políticamente como para frustrar la hegemonía monopolista.

Pero ese poder de resistencia, que contribuyó a desbaratar el plan de Krieger Vasena y que desembarcó a Onganía del Estado tiene, a su vez, límites para revertir el proceso; límites económicos, sociales y políticos que dificultan, hasta tornarla improbable, una asimilación del tipo de hegemonía consolidada en el Perú por la revolución militar de 1968.

Entre junio de 1970, en que es derrocado Onganía, y marzo de 1971, en que toma el poder Lanusse, tiene lugar en la Argentina un paréntesis significativo: el breve período presidencial del general Levingston. El interés de ese lapso interno a la Revolución Argentina consiste en que, durante el mismo y a través del ministerio de Economía de Aldo Ferrer, el capital nacional llega al punto más alto, desde la caída de Perón en 1955, en sus intentos por influir sobre las decisiones del Estado.

Aunque finalmente fracasaron, Levingston-Ferrer buscaron poner en marcha un proyecto reformista que, en lo económico-social, aspiraba a asociar al capital nacional con el Estado. No se trataba de un proyecto nacionalista revolucionario de capitalismo de Estado, sino de una más módica “argentinización” de la economía, a través de la utilización del importante poder de compra del Estado y de una redistribución del crédito bancario que favoreciera a los empresarios nacionales.

La estructura de ese poder debía basarse en una coalición entre Fuerzas Armadas, burocracia sindical y la tecnocracia ligada a las organizaciones corporativas en que se agrupa el capital nacional, dejando fuera de proceso a los partidos políticos. Pero la clave para el funcionamiento de ese bloque era que las Fuerzas Armadas aceptaran transformarse en el eje dinamizador de un proyecto reformista que revirtiera el proceso de extranjerización de la economía.

Desde el punto de vista de las formas, el modelo propuesto recogía las iniciativas primeras de la Revolución Argentina, en tanto marginaba al sistema de partidos y tendía a mantener desmovilizados a los sectores populares. Pero su contenido era diferente: así como las Fuerzas Armadas habían sido el eje del proyecto

neodependiente, debían transformarse ahora en principal sostén de un proceso tendiente a permitir que la burguesía agraria y el capital nacional ganaran posiciones, en detrimento del capital monopolista, que debía dar un paso al costado y, en algunos aspectos, sufrir las consecuencias de medidas económicas que lo perjudicaban.

Un mes antes de ser derrocado, el gobierno adoptó decisiones que contrariaban concretos intereses de las grandes compañías petroleras extranjeras y de empresas como Bunge y Born y Deltec. Estas medidas que efectivamente indicaban un desplazamiento en el interior de las clases dominantes a favor del capital nacional, no impidieron, sino en todo caso aceleraron, la crisis política.

El estado de movilización de las clases populares, en ascenso desde 1969, creció en intensidad cuando la economía, a fines de 1970, entraba en un nuevo período recesivo e inflacionario. El sistema de partidos, por su parte, acentuó su ofensiva contra un modelo político que lo excluía.

En medio de esa crisis de legitimidad, las Fuerzas Armadas cargaban ya con un desgaste suficiente como para que pudieran tener éxito los planteos tendientes a inducirlos para que se pusieran a la cabeza del proyecto reformista elaborado por la tecnocracia ligada al capitalismo nacional. La presencia de masas movilizadas había llevado ya a la cúpula militar a diseñar otro intento de desemboque para la crisis: la reconciliación con los partidos políticos y la burocracia sindical.

El tránsito fugaz de Levingston tiene similitud con el episodio que protagonizara, en Brasil, el general Alburquerque Lima, líder de la corriente llamada nacionalista del Ejército, finamente desalojado de toda participación en el poder. La diferencia está en el proceso posterior al desenlace infeliz para las corrientes nacionalistas: en Brasil, del fracaso de ese intento resurgirá con más bríos el proyecto neodependiente; en la Argentina se irá, trabajosamente, pactando un nuevo empate entre las clases dominantes.

LAS SALIDAS PARA LAS CRISIS

El vacío consecuente al fracaso del proyecto hegemónico del capital monopolista puso desde entonces en el primer plano las contradicciones internas del sistema capitalista dependiente, pero sobre el fondo de un crecimiento sostenido de la movilización social de las clases populares en la que el proletariado industrial introduce, con una fuerza inédita en la Argentina, la problemática socialista. Se trata, pues, de la crisis de un modelo

hegemónico burgués, ante la presencia de una creciente movilización popular con fuertes elementos socialistas.

Es esta movilización la que provoca las dos respuestas orgánicas con las que las clases propietarias intentan reequilibrar el sistema político. Una respuesta es el transformismo y está ubicada a la “derecha” del sistema. Otra es el reformismo, colocada a la “izquierda”. Ambas, aunque enfrentadas, pueden coexistir en un acuerdo que no significa homogeneidad absoluta, sino integración conflictiva entre “oficialismo y oposición” en el interior de un sistema político unificado.

El transformismo tiene como eje propulsor a las Fuerzas Armadas. El Reformismo, a las direcciones de los grandes partidos políticos y a la burocracia sindical. Pero lo que interesa marcar es que el corte principal que separa a ambos proyectos no es el contenido de sus propuestas económico-sociales sino el de sus propuestas políticas. Concretamente, el punto de ruptura entre transformismo y reformismo se refiere al control de la movilización, aunque este problema político sea matriz de diferenciaciones subsecuentes en otros planos.

El derrocamiento de Levingston inaugura la tercera etapa de la Revolución Argentina, cuyo signo es la dura negociación a fin de reconstruir las bases sociales del Poder, debilitado por la crisis política que sucede a las conmociones inauguradas por el Cordobazo.

Esta tercera etapa se caracteriza por una inversión, propuesta por las Fuerzas Armadas, de la problemática inicial: ya no se planteará que la solución política habrá de surgir como consecuencia natural, a largo plazo, del éxito de un modelo económico, sea éste el del capital monopolista (Onganía-Krieger Vasena) o el de la asociación del Estado con el capital nacional (Levingston-Ferrer). El orden de la secuencia se alterará en los proyectos

oficiales: sólo la obtención de un mínimo de legitimidad podrá garantizar una solución económica. El objetivo es reconstruir el poder del Estado para todas las fracciones de las clases dominantes, otorgándole al sistema político el máximo posible de consenso, con el reaseguro de las Fuerzas Armadas a fin de garantizar a través de la violencia, el control de la movilización. Este es el sentido del “Gran Acuerdo Nacional” proyectado, en nombre de la seguridad del sistema, por los altos mandos de las Fuerzas Armadas. El modelo económico pasa a segundo plano frente al modelo político: interesa la seguridad, a través de “unir a los adversarios y combatir a los enemigos”, por encima del desarrollo.

La doctrina militar disocia sus elementos claves y el período que arranca en abril de 1971 no puede identificarse con una orientación precisa en lo económico que vaya más allá de cierto pragmatismo básico. La disolución del ministerio de Economía es casi simbólica: parece refrendar que ese campo es un terreno abierto para la capacidad de presión de las clases y fracciones de clase.

La política ocupa el “puesto de mando”; el tema de la legitimidad de poder aparece como central, y la “reconciliación” para obtener bases de consenso es planteada como objetivo supremo.

El elemento indispensable para la construcción de ese mínimo consensual que reconstruya la integridad del Estado, es la articulación de un acuerdo entre las Fuerzas Armadas, los partidos políticos y la burocracia sindical. El carácter de ese acuerdo y el contenido de las fuerzas sociales convocadas para ponerlo en práctica, determina, de hecho, un repliegue político de capital monopolista, que debe aceptar un pacto con el capital nacional en el espacio que menos controla, dada su virtual carencia de representación política partidaria directa: el de la escena electoral y parlamentaria.

Esta salida negociada, si no significa la derrota del capital monopolista, en tanto el desenvolvimiento de la economía sigue un rumbo relativamente autónomo que le permite acentuar su predominio en ese nivel, importa, en sentido contrario, la mayor victoria que, dadas las relaciones de fuerza políticas y el carácter subordinado de sus posiciones en el sistema económico pueden conseguir los sectores dominantes no monopolistas. Esto es, reubicarse en el poder político, aun cuando su fuerza real solo alcance para restablecer una situación de empate y no para instrumentar un proyecto hegemónico alternativo capaz de potenciar un modelo económico dinámico.

La burguesía monopolista, al ser desautorizado en corto plazo el “modelo brasileño” de hegemonía, queda descolocada ahora en el abanico de posibilidades políticas y debe sacrificar su presencia antagónica a favor de conseguir una mínima consolidación del sistema de poder, que había sido virtualmente vaciado desde 1969 en adelante. Incapacitada para imponer su modelo, la reconciliación propuesta se le aparece como una menor que, de todos modos, no llega a cuestionar su predominio en el mercado económico, aunque deba admitir la competencia con los otros sectores de la burguesía en el mercado político del sistema de partidos.

Todo el proceso protagonizado por las Fuerzas Armadas, los partidos políticos y la burocracia sindical tras la propuesta lanzada desde el Estado para la construcción de un Gran Acuerdo Nacional, tiende a afirmar, como tendencia, los presupuestos básicos de esta tregua que las clases dominantes deben pactar para salir de la crisis política y colocarse en mejores condiciones para enfrentar la crisis social. Un problema, el de los métodos más idóneos para el control de la movilización, sobre el que se impostan luego determinaciones de clase, marca la cuota mayor de dificultades que se traduce, incluso, en choques violentos, a partir de las discrepancias, que, como respuestas orgánicas a la situación, aportan el reformismo y el transformismo.

El transformismo es la ideología de las Fuerzas Armadas; la fórmula político-social que asume, en esta etapa de la crisis argentina, la doctrina de la seguridad. Es el modo “realista de la contra-insurgencia”. Definimos en general al transformismo como un camino de salida para una situación de crisis orgánica en el que una de las fracciones dominantes propone un programa de mantenimiento del Orden que incluya la absorción de representantes de fuerzas dominadas. Esta absorción modifica las formas políticas de la dominación, pero no altera sus contenidos económico-sociales. Aunque utilice cuadros reformistas para realizar sus fines, un sistema de tipo transformista intenta la superación de la crisis a través del rechazo de toda reforma orgánica.

En el caso argentino actual este proceso se especifica. El transformismo de las Fuerzas Armadas, como acuerdo con la burocracia sindical y los partidos políticos, parece dispuesto a aceptar ciertas reformas económico-sociales. Sus “límites de tolerancia” están básicamente en lo político, en el control de la movilización popular, en

el manejo de la seguridad. Las garantías que las Fuerzas Armadas exigían de las otras partes convocadas para el acuerdo, tuvieron un punto de arranque “máximo” —la candidatura de Lanusse a la presidencia constitucional— y parece tener ahora un punto de llegada “mínimo”: la coparticipación en el poder, el control sobre la movilización a través de la violencia, la responsabilidad indelegable de garantizar la seguridad contra el “enemigo interior”. Es a partir de esto y no de la adhesión, como lo fuera en 1966, a un modelo económico explícito, que las Fuerzas Armadas se transforman en representantes indirectos del mejor programa posible, en las condiciones actuales, para los monopolios; en el estrato protector que éstos tienen si el resto de las clases dominantes intenta aprovechar la movilización popular para recuperar posiciones perdidas en el sistema económico.

El reformismo, sustentado en los partidos políticos y en la burocracia sindical, expresa, en cambio, más directamente intereses económico-sociales. Su contenido es maximizar las metas del capital nacional frente al modelo de neodependencia, a través de una asociación con el Estado que ponga en marcha un programa nacional-desarrollista y que permita

negociar la dependencia. Su plataforma es la de los acuerdos entre la CGE y la CGT: los puntos allí incluidos unifican a las burocracias políticas de los grandes partidos.

En estas condiciones se llega a las elecciones del 11 de marzo. Ese día, la fuerza del número se transforma en un hecho cualitativo: la multitudinaria votación a la coalición hegemonizada por el peronismo pone en cuestión también al “punto de llegada mínimo”, aceptado por el transformismo militar tras haber asimilado el irremediable fracaso de los intentos de “constitucionalizar” la presidencia de Lanusse. Esta puesta en cuestión, en tanto paraliza la iniciativa política desplegada hasta entonces por las Fuerzas Armadas, significa el bloqueo más significativo sufrido por el proyecto hegemónico del capital monopolista, al sancionar su derrota en manos de la peor coalición posible para sus intereses, en las condiciones presentes.

Claramente, el mejor resultado para el capital monopolista de unas elecciones a las que había sido empujado, era lograr una fragmentación del poder que obligara a una negociación permanente entre reformismo (dividido casi por mitades entre oficialismo y oposición) y transformismo, aun cuando el primero mantuviera formalmente el control del sistema político. Esto es, una versión institucionalizada del Gran Acuerdo Nacional, bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas. El aluvión de votos desbarató esas intenciones, planteando una ruptura grave de la continuidad proyectada.

Los comicios, dado el carácter rotundo del pronunciamiento, dejan virtualmente sin estrategia al transformismo y en un vacío político al capital monopolista. El bloque a instalarse pasa a ser liderado por fuerzas representativas de la burguesía no monopolista, básicamente las burocracias políticas, la burocracia sindical y las organizaciones representativas directas de los intereses del capitalismo nacional. En su interior, con una capacidad organizativa menor, pero expresando con nitidez las expectativas más profundas de la movilización popular posterior a 1969, coexisten tendencias socialistas, radicadas básicamente en la juventud y en el sindicalismo de oposición.

Finalmente, a la derecha, pero todavía en el exterior del sistema, expectantes, sin un liderazgo claro, se ubican las Fuerzas Armadas, envueltas en el fracaso político de su grupo dirigente, pero hasta ahora incapaces de revertir ese marginamiento provocado por la derrota.

Este gobierno, con contradicciones en su interior entre quienes postulan el “capitalismo nacional”, quienes reclaman la movilización para el socialismo y aun aquellos otros que

actúan como cuñas larvadas del capital monopolista; que no goza, además, de un sostén activo por parte de las Fuerzas Armadas sino de un consentimiento sólo pasivo, resultado de una derrota que no ha sido elaborada, necesita transformarse rápidamente en poder, esto es, en alternativa hegemónica tras el fracaso del capital monopolista.

Es en este punto donde comienza a plantearse, como problema central, el de la capacidad de la coalición triunfante para poner en marcha una política de reformas orgánicas que pueda revertir el avanzado proceso de dependencia económica, cuando hoy, a diferencia de lo que sucedía en la década del 40, ésta se asienta básicamente en el dominio desde el interior de la estructura productiva más avanzada.

La debilidad económica frente al capital monopolista de las clases que le dan contenido al liderazgo del nuevo proceso sólo podría ser compensada por una efectiva y profunda asociación con las Fuerzas Armadas que se resuelva en un proyecto de capitalismo de Estado, algo que en las actuales condiciones de monopolización de

la economía argentina se acercaría peligrosamente —para la burguesía local y para las Fuerzas Armadas preocupadas por el “enemigo interior”— a una vía no capitalista de desarrollo.

Si el reformismo nacionalista fracasara en la consolidación de un proyecto hegemónico basado en la asociación entre el Estado y la burguesía no monopolista, o si limitara sus ambiciones a una mera negociación de la dependencia aprovechando las nuevas condiciones del mercado mundial, el retorno al empate y la continuidad de la situación de crisis social y política resultaría la previsión más verosímil. Mucho más, en tanto el capitalismo monopolista, que mantendría su predominio en el nivel económico forzaría nuevamente la búsqueda de la hegemonía en el bloque de poder.

Para las clases populares, el proletariado en primer lugar, el triunfo electoral de marzo significa el pasaje a una nueva etapa de lucha, que libraré, obviamente, en condiciones mucho más favorables que las existentes desde 1955. Cualquier recrudecimiento de la crisis tiene, ahora, un dato suplementario inexistente a mediados de los años 60: la presencia de un nuevo movimiento social que, desde diferentes tiendas organizativas, pero básicamente ahora desde el interior del propio sistema político, plantea una redefinición de las salidas

políticas en términos de su adecuación con la contradicción social básica generada por el desarrollo del capitalismo monopolista dependiente en la Argentina.

NOTAS

* El cuerpo fundamental de este artículo fue pensado y redactado antes de las elecciones del 11 de marzo. Las líneas básicas del análisis se mantienen inalteradas y ninguna de las conclusiones debe ser, a mi juicio, reformada. La estrepitosa derrota política sufrida por el capital monopolista seis años después de su ascenso triunfal al poder en andas de la Revolución Argentina, ha abierto una nueva fase en la lucha de clases que coloca, por primera vez en décadas, nuevamente a las fuerzas populares ante la posibilidad de revertir a su favor un proceso; de transformar una situación defensiva, primero en equilibrio y luego en ofensiva. Pero ese proceso recién se abre: la avalancha de votos populares no sólo no alcanza por sí sola para tomar el poder sino que tampoco permite excluir del gobierno a fuerzas antipopulares que actúan en su propio interior, las que intentarán ahora negociar la dependencia con el capital monopolista. El 11 de marzo el pueblo dispuso los funerales del proyecto más coherente elaborado por el capital monopolista, al derrocar a la camarilla militar que, claramente desde 1966, se había transformado en principal soporte político de la dependencia. Este es un hecho histórico, pero a partir de él otra historia debe nacer aún.

1 Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo sobre política y sobre el Estado moderno, Buenos Aires, Nueva Visión, 1972, págs. 71 y 72. La expresión acerca de que deben transformarse en partido, no tiene que ser tomada en sentido estricto: para Gramsci, un gran diario, por ejemplo, puede ser calificado como “partido” o “fracción de partido”. Se trata de expresiones orgánicas que, a partir de intereses de clase, plantean las cuestiones en conflicto no sólo sobre un plano corporativo, sino sobre un plano universal.”

2 Karl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, tomo 1, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971, pág. 204.

3 Gramsci, op. cit., pág. 71. La expresión la toma casi literalmente del Prefacio a la Contribución a la crítica de la economía política, de Marx.

- 4 Mao Tse Tung, Sobre la contradicción, en Obras Escogidas, tomo 1 pág. 356.
- 5 Samir Amin, L'Accumulation a l'échelle mondiale, París, 1970, pág. 34.
- 6 Ruy Mauro Marini, "Dialéctica de la dependencia: la economía exportadora" en Sociedad y Desarrollo, N° 1, Santiago de Chile, 1972, pág. 37.
- 7 Amin, op. cit. pág. 34.
- 8 Gramsci, op. cit., pág. 76.
- 9 La definición de Lenin sobre "situación revolucionaria", en Obras Completas, tomo XXI, pág. 211/12, Buenos Aires, 1960.
- 10 Torcuato Di Tella, "Inmovilidad o coexistencia en la Argentina", en James Petras y Maurice Zeitlin, América Latina: ¿Reforma o Revolución?, tomo 1, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1970, pág. 205.
- 11 Política Económica Argentina, Buenos Aires, 1968, pág. 35.
- 12 Osiris Villegas, Políticas y estrategias para el desarrollo y la seguridad nacional, Buenos Aires, 1969, pág. 136.
- 13 El discurso del general Juan N. Iavicoli, pronunciado en la Conferencia de Ejércitos Americanos reunida en Buenos Aires en noviembre de 1966, puede leerse en Clarín del 3 de noviembre de 1966.

14 Columna de Mariano Grondona, en Primera Plana del 12 de diciembre de 1967.

15 Cf. Mónica Peralta Ramos, *Etapas de acumulación y alianzas de clases en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972, págs. 62 y 183.

16 En realidad, desde los años 60 la ofensiva del capital monopolista ha tendido, con éxito, a integrar subordinadamente a la burguesía nacional en su circuito económico o condenarla a su desaparición. De acuerdo con estadísticas oficiales, más de once mil empresas quebraron en los últimos cinco años, debilitando el peso económico del capital nacional. Pero lo que interesa destacar, más allá de las habituales discusiones sobre la extinción de la burguesía nacional en la Argentina, es lo siguiente, dentro de la línea de razonamiento de estas notas: a) la existencia de una diferenciación contradictoria entre esos grupos y la burguesía monopolista, basada en intereses; b) la capacidad, en esa relación conflictiva, de oponer resistencias, de negociar transacciones. Es que, por encima de su peso económico (mucho mayor que el de similares fracciones de clase en otros países latinoamericanos), vale su peso social. Según la clasificación del Censo Industrial 1963-64, las empresas de las ramas industriales “mediana y escasamente concentradas”, en las que predomina abiertamente el capital nacional y cuyo destino se liga al del mercado interno, producían el 43,6% de los bienes industriales y ocupaban el 57,7% del total de la mano de obra. Este último dato es muy importante en términos de peso social: puede ayudar a explicar la relación que la burocracia sindical mantiene con las organizaciones profesionales del empresariado nacional y los reiterados acuerdos a que han llegado para reclamar en conjunto modificaciones a la política estatal.

17 Oscar Braun y Ricardo Kesselman, *Argentina 1971: estancamiento estructural y crisis de coyuntura*, Centro de Estudios de Economía Política, Buenos Aires, 1971, pág. 1 (véase pág. 45 del presente volumen).

Se agradece la donación de la presente obra a la Cátedra de Informática y Relaciones Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

<http://www.hipersociologia.org.ar/base.html>

Súmese como [voluntario](#) o [donante](#) , para promover el crecimiento y la difusión de la [Biblioteca Virtual Universal](#).

Si se advierte algún tipo de error, o desea realizar alguna sugerencia le solicitamos visite el siguiente [enlace](#).

